

Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 145803-2020: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos tercero a quinto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que la abogada Rocío Toro Bravo recurre de protección en favor de Patricio Carrasco Vargas, en contra del Hospital San Luis de Buin - Servicio de Salud Metropolitano Sur (SIC), en contra del documento singularizado como "notificación" de fecha 25 de junio de 2020, por medio del cual se dispuso la no renovación de su contrata para el resto del año 2020; acto que considera ilegal y arbitrario y que, según expone, vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide dejarlo sin efecto ordenando la prórroga de la contrata y la reincorporación al servicio, además del pago de sus remuneraciones entre la fecha de la separación y su efectivo reintegro, con costas.

Segundo: Que no existe discusión respecto de que la relación estatutaria a contrata del recurrente ha existido de manera continua, desde el 23 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2020, habiendo sido prorrogada en



el último período hasta la última de las fechas señaladas.

Tercero: Que reiteradamente esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, aun cuando no fue alegado como defensa formal por parte de la recurrida, es preciso referirse a la oportunidad en que fue ejercida la presente acción constitucional. En efecto, es un hecho no controvertido por el actor que la última renovación de su contrata se materializó a través del Oficio N° 41 de 30 de noviembre de 2020, del Director del Hospital de Buin, en el cual se dejó claramente establecido que la prórroga de la contrata sólo lo sería hasta el 30 de junio de 2020, sujeta a evaluación, por las razones que se contienen en dicho acto administrativo.



Es, asimismo, pacífico que el recurrente no impugnó el anotado Oficio, conformándose con la renovación de su contrata hasta la fecha señalada.

Así las cosas, y considerando que la acción de protección se interpuso con fecha 24 de julio de 2020, sólo cabe concluir que el arbitrio ha sido enderezado fuera del plazo establecido en el numeral 1° del Auto Acordado de esta Corte Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, por lo que el mismo resulta ser extemporáneo.

Quinto: Que, la conclusión anterior no se opone a lo aseverado por el actor en el sentido de que el recurso se dirige en contra del documento denominado "notificación" de fecha 25 de junio de 2020, pues el mismo sólo tuvo un propósito informativo de que su contrata no sería renovada más allá del 30 de junio de esa anualidad (algo que el actor ya sabía y había aceptado con antelación) por las razones que allí se detallan, y que coinciden con los fundamentos expresados en el Oficio N° 41 de 30 de noviembre de 2019.

Entender lo contrario, significaría aceptar que el cómputo del plazo para interponer el recurso queda entregado al arbitrio del recurrente, circunstancia que pugna con el carácter objetivo del término establecido en el citado Auto Acordado.



Sexto: Que, por lo razonado, el recurso de apelación interpuesto por el recurrente no puede ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y en el Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **se confirma** la sentencia apelada de veintinueve de agosto de dos mil veinte, **con declaración** que el recurso de protección queda rechazado, por extemporáneo.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Muñoz, quien fue del parecer de revocar el fallo en alzada y acoger el recurso de protección deducido, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°) Que, en primer término, en lo que atañe al plazo para interponer la presente acción constitucional, lo cierto es que la recurrida en su informe no solicitó la extemporaneidad del recurso y, aun cuando lo hubiere hecho, la misma no habría podido prosperar.

En efecto, si bien la última renovación de la contrata del recurrente lo fue hasta el 30 de junio de 2020, cuestión que éste aceptó al no impugnar el acto administrativo que así lo dispuso, no es menos cierto que el Oficio N° 40 de 30 de noviembre de 2020 condicionó la continuidad de los servicios del actor, en forma



posterior al 30 de junio, a una evaluación de su desempeño durante el primer semestre del año en curso.

2°) Que, por consiguiente, el actor tenía la legítima expectativa de que su contrata podía, eventualmente, ser prorrogada más allá del 30 de junio de 2020. En tales condiciones, tal y como asevera la parte recurrente el solo vencimiento del plazo fijado en el Oficio N° 40 no resulta suficiente para entender que la contrata no se renovaría: es menester que se dicte un acto administrativo formal que explicita las razones o motivos pertinentes, puesto que la evaluación, que es la condición para su término, fue negativa.

3°) Que, en este entendimiento, el recurso se ha dirigido no en contra del Oficio N° 40 de 30 de noviembre de 2019, sino de la "notificación" de fecha 25 de junio de 2020, el cual, para estos efectos, reviste la formalidad de acto administrativo en los términos del artículo 3 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, al exteriorizar la voluntad de la Administración e informar la no renovación de la contrata del recurrente por lo que resta del año 2020, expresando como fundamento que *"(...) en virtud de los antecedentes referentes a su comportamiento y acuerdos tomados respecto al necesario cambio en su desempeño tanto en relación al manejo clínico y de protocolos del Servicio de Urgencia como en sus*



relaciones y trabajo en equipo, los cuales a evaluación de esta dirección no se han cumplido”.

4°) Que, así las cosas, y atendido que es un hecho no controvertido que el acto impugnado fue notificado al recurrente con fecha 26 de junio de 2020, la acción impetrada con fecha 24 de julio del mismo año lo ha sido dentro de plazo.

5°) Que, en cuanto al fondo, no existe discusión respecto de que la relación estatutaria a contrata del recurrente ha existido de manera continua, desde el 23 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2020.

6°) Que reiteradamente esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

7°) Que la circunstancia de haber permanecido Patricio Carrasco en el cargo a contrata por más de once años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por



sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie.

Por ello, la decisión de no prorrogar la contrata del recurrente luego del 30 de junio de 2020, en circunstancias que le asistía la confianza legítima de que su contrata sería renovada hasta el 31 de diciembre de ese año, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad sobre sus remuneraciones.

8°) Que, por lo reflexionado, el recurso de protección debió ser acogido, en concepto de este disidente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Quintanilla y de la disidencia su autor.

Rol N° 104.582-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Julio Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros señor Muñoz por estar con feriado legal y señora Sandoval por haber cesado en sus funciones.





En Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

